



S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 48 **O R D I N A R I A**

MARTES 30 DE MAYO DE 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con trece minutos del martes treinta de mayo de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no asistió a la sesión por gozar de vacaciones, al haber integrado la Comisión de Receso correspondiente al Segundo Período de Sesiones de dos mil dieciséis.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta y siete ordinaria, celebrada el lunes veintinueve de mayo del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS



Sesión Pública Núm. 48

Martes 30 de mayo de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes treinta de mayo de dos mil diecisiete:

I. 190/2014

Contradicción de tesis 190/2014, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, respectivamente, los amparos directos en revisión 4506/2013 y 1047/2000. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo”*. La tesis a que hace referencia el punto resolutivo segundo tiene por rubro: *“EL ARTÍCULO 199, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS (VIGENTE HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2014) ES VIOLATORIO DEL DERECHO A RECURRIR SENTENCIAS CONDENATORIAS”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

competencia, a la legitimación del denunciante y a los criterios contendientes, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea presentó los considerandos cuarto, quinto y sexto relativos, respectivamente, a la existencia de la contradicción, al estudio de fondo y a la jurisprudencia que debe prevalecer. Preciso que el tema gira en torno a la constitucionalidad del artículo 199, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, vigente hasta el treinta de abril de dos mil catorce, el cual no prevé la procedencia de algún recurso en contra de sentencias condenatorias no privativas de libertad.

Recordó que la Segunda Sala consideró que era constitucional, ya que impedir la posibilidad de recurrir resoluciones de menor interés evitaría la prolongación innecesaria de los juicios penales, en aras de la procuración de una justicia pronta; mientras que la Primera Sala sostuvo que violaba el derecho de todo condenado a un recurso ordinario en el que se revise la totalidad de la sentencia, contenido en el artículo 8, punto 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El proyecto propone determinar que la contradicción de tesis es existente y que el artículo en cuestión es inconstitucional porque el artículo 8, punto 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de todas las personas declaradas penalmente responsables por la comisión de un delito, sin importar el tipo de sanción penal que les sea impuesta, a recurrir el fallo, independientemente de que, en contra de estas sentencias, proceda el juicio de amparo directo, pues éste no es un recurso ordinario.

El señor Ministro Franco González Salas, en atención a sus participaciones anteriores, expresó reservas en cuanto a los puntos dos y cuatro de la página diecisiete del proyecto.

El señor Ministro Cossío Díaz sugirió que en la pregunta de la página diecinueve del proyecto —“Así, este Tribunal Pleno estima necesario adoptar un criterio uniforme respecto del tema relativo a si ¿es constitucional que el artículo 199, fracción I del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos (vigente hasta el treinta de abril de dos mil catorce) impida que los sentenciados interpongan algún recurso ordinario en contra de una sentencia condenatoria que no sea privativa de libertad?”— se precise que también se trata de cuando se sustituya la pena de prisión.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea modificó el proyecto con la sugerencia realizada.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Cossío Díaz sugirió que en la página veinticuatro del proyecto se cite el “Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se distinguió entre el derecho a recurrir el fallo y el derecho a un recurso judicial efectivo.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea ofreció revisar dicho caso y, en su caso, incorporarlo al engrose.

El señor Ministro Medina Mora I. se manifestó con el sentido del proyecto, apartándose de algunas consideraciones y anunció voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada de los considerandos cuarto, quinto y sexto relativos, respectivamente, a la existencia de la contradicción, al estudio de fondo y a la jurisprudencia que debe prevalecer, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. apartándose de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Medina Mora I. anunció voto concurrente.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEGUNDO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, en la inteligencia de que la redacción definitiva de la tesis derivada de esta resolución, cuyo texto debe incluirse en la sentencia correspondiente, una vez aprobado el engrose respectivo, se someterá al procedimiento administrativo que regularmente se sigue ante el Comité de Aprobación de Tesis, en términos de lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo General 20/2013.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 402/2014

Contradicción de tesis 402/2014, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, respectivamente, los amparos directos en revisión 1018/2014 y 1609/2011. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: *“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere. SEGUNDO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en la tesis redactada en el último considerando del presente fallo”*. La tesis a que hace referencia el punto resolutivo segundo tiene por rubro: *“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación y a los criterios contendientes, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando cuarto, relativo a una precisión en cuanto a los criterios sustentados, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó los considerandos quinto, sexto y séptimo relativos, respectivamente, a la existencia de la contradicción, al estudio de fondo y a la decisión.

Precisó que la materia de la contradicción versa sobre si el tercero perjudicado —Ley de Amparo abrogada— o tercero interesado —Ley de Amparo vigente— están legitimados para interponer un recurso de revisión cuando en la sentencia de amparo directo, en la que se concedió el amparo, el tribunal colegiado omitió pronunciarse sobre los planteamientos de constitucionalidad que la parte quejosa adujo en la demanda de garantías.

Recordó que la Primera Sala determinó que el tercero está legitimado para interponer este recurso de revisión, en tanto que la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado le causa una afectación directa a su esfera jurídica, en la medida de que concedió el amparo a su contraparte, de lo que surgió la tesis 1a. CCCLXXXII/2014 (10a.) de rubro “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DEL TERCERO INTERESADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRAVIOS". Por su parte, la Segunda Sala determinó que el tercero no tiene legitimación para interponer este recurso de revisión, puesto que no hay una afectación directa en su esfera jurídica, ya que, en todo caso, la afectación es sobre a quién se le aplicó la norma, es decir, la parte quejosa y, en esa medida, es la que resentiría la afectación, de lo que derivó la tesis 2a. LXXXIV/2011 (9a.) de rubro "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO PERJUDICADO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD".

El proyecto propone determinar que el derecho subjetivo del tercero lo faculta y legitima para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se distingue entre las partes para interponer el medio de defensa mencionado, no únicamente por ser parte del juicio de amparo, sino porque puede resentir una afectación a su esfera jurídica y, por tanto, es una cuestión que se tiene que ver en el fondo.

El señor Ministro Cossío Díaz observó, respecto del subrayado del párrafo segundo de la página treinta y tres del proyecto —"siendo que el análisis de constitucionalidad, a su juicio, pudiera resultar medular a efecto de que al estudiar el fondo del asunto se realizara la interpretación definitiva del



artículo tildado de inconstitucional”—, que pudiera sugerir que el tercero puede beneficiarse del análisis de constitucionalidad planteado por el quejoso, cuyo estudio ha omitido el tribunal colegiado, lo que en principio podría resultar cuestionable.

Advirtió que en el último párrafo de la página treinta y cuatro se incorporaron aspectos de la sentencia al amparo promovido por Warner Lambert Company, que no son pertinentes para el caso.

Apuntó que en la página treinta y cinco se afirma que “el contenido de los agravios no puede conducir a declarar la procedencia o improcedencia del recurso de revisión”; sin embargo, estimó que, una vez acreditada la legitimación, la improcedencia del recurso podría derivar de la inoperancia de los agravios, pues impediría emitir un criterio de importancia y trascendencia.

Por tanto, sugirió matizar esas partes del proyecto y, de no aceptarse esas propuestas, votaría en favor del proyecto con voto aclaratorio para no comprometer su criterio.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek agradeció las sugerencias realizadas.

El señor Ministro Pérez Dayán se manifestó en contra del proyecto pues, si bien el tercero está interesado en recurrir la resolución que no abordó el planteamiento del quejoso en materia de constitucionalidad de leyes, de convencionalidad o de interpretación directa de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constitución —en la medida en que perjudica sus intereses—, en esencia, tiene un interés opuesto al del quejoso en esta contienda judicial, es decir, el quejoso pretende invalidar la aplicación de la norma en la sentencia correspondiente, sin hacer una declaratoria que abarque algunos otros actos posteriores —por lo que es entendible que un tribunal colegiado, no obstante estar planteada una razón de inconstitucionalidad, decide no abordarla o también puede ser una inadvertencia—, por lo que el quejoso es el que espera ese pronunciamiento de constitucionalidad.

Explicó que, ante esta omisión, existe la figura de la preclusión, consistente en que, si el afectado no hace valer en amparo directo en revisión esta omisión del tribunal colegiado, no obstante tener el interés de que se corrija por el órgano revisor, pierde ese derecho, de suerte que, una vez repuesto el procedimiento y dictada la sentencia nuevamente, no podrá volver a plantear esa constitucionalidad. Preciso que, en la Segunda Sala, se matizó la figura de la preclusión en función del mayor beneficio para los quejosos, en la inteligencia de que, si hay razones por las cuales el tribunal colegiado indujo al quejoso a entender que no era el momento de resolver un tema de constitucionalidad, tampoco se puede constreñir al quejoso a promover el recurso de revisión para evitar la preclusión.

Reconoció que el proyecto es correcto al afirmar que el contenido de los agravios no conduce a declarar si el promovente del recurso tiene o no legitimación, sino que su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procedencia está sujeta a condiciones objetivas, esto es, el agravio que le cause la sentencia que dicta el tribunal colegiado; de ahí que, si el planteamiento de constitucionalidad no fue formulado por el tercero, quien tiene un interés contrario al del quejoso, entonces carece de legitimación para cuestionar la omisión de su estudio.

Recalcó que la mecánica procesal exige estándares mínimos de procedencia, por ejemplo, verse perjudicado por una decisión, por lo que, si bien de facto puede verse perjudicado el tercero, apelando a que seguramente la ley será constitucional y pretende que desde ese momento se tenga resuelto definitivamente el tema, no es de su incumbencia procesal esa omisión de estudio.

Advirtió que, si se le da la oportunidad al tercero de promover el recurso de revisión para que se defina el tema de constitucionalidad, no obstante que no fue su planteamiento ni la sentencia le causa un agravio, se involucraría un tema de legalidad, es decir, si se concedió el amparo al quejoso con sólo el tema de legalidad, eso le perjudicaría al tercero y, por ello, busca que se defina el tema de constitucionalidad; sin embargo, en revisión, sólo procedería revisar el tema de legalidad si éste se ve directamente afectado con un tema de constitucionalidad, esto es, de declararse inconstitucional la norma, pero si el agravio fuera infundado y se mantuviera el tema de omisión, el tema de legalidad no cambiaría y, por ende, no le afectaría al tercero.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Concluyó en que no hay manera de entender que se le cause un agravio jurídico al tercero, cuya pretensión no coincide con la del quejoso y, por ende, le favorece todo aquello que no le haya beneficiado a su contrario —el quejoso—, por lo que cualquier argumento que plantee sería inútil, siendo entonces que no le favorecería la revisión que interponga.

Finalmente, recalcó que el tercero está supeditado al agravio, el cual no puede constituirse sólo voluntariamente interponiendo el recurso y argumentándolo, sino que se debe determinar a partir de la afectación de la sentencia, en el caso, al no corresponder su pretensión con la del quejoso, la falta de estudio de un planteamiento de inconstitucionalidad no le da oportunidad alguna para interponer la revisión.

La señora Ministra Piña Hernández estimó que la revisión en amparo directo es excepcional, en términos de los artículos 107, fracción IX, constitucional y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y se constriñe a los temas de constitucionalidad o de interpretación de tratados internacionales.

Se inclinó por el criterio de la Segunda Sala, aclarando que no pertenecía a la Primera Sala cuando se sustentó su criterio.

Consideró que el mecanismo del amparo directo en revisión responde a que, por tratarse del estudio de las sentencias —en muchas ocasiones— terminales, brinda la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

oportunidad a esta Suprema Corte de dar la última palabra tratándose de la constitucionalidad de las normas de nuestro sistema jurídico, así como de la interpretación de tratados internacionales en los que México sea parte, cuando el tribunal colegiado haya omitido su estudio.

Puntualizó que el artículo 107, fracción IX, constitucional enuncia que “La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras”, con lo que el Constituyente clasificó ésta como la materia del amparo directo en revisión. En el caso de la Ley de Amparo, sólo les da legitimación a las partes para la interposición de los recursos, pero fundamentalmente para las decisiones que les agraven, como se advierte de su artículo 87, el cual se ha interpretado en ese sentido por esta Suprema Corte e, inclusive, la Segunda Sala tiene una tesis relativa a la legitimación de la autoridad en cuanto a la suspensión. Con lo anterior, concluyó que, en materia de recursos en el juicio de amparo, la legitimación está relacionada con el agravio que le pudiese ocasionar la decisión respectiva.

En el supuesto de estudio, el quejoso impugnó la constitucionalidad de una norma, y el tribunal colegiado, por la razón que fuere —mayor beneficio, reposición de procedimiento por violación procesal, entre otros—, omitió analizar el concepto de violación que implicaba un estudio de constitucionalidad, mas eso permite la procedencia del recurso de revisión al quejoso, pues es al único que le puede



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

causar un agravio directo, por regla general, sin dejar de reconocer que podría haber supuestos excepcionales. En este sentido, si sólo al quejoso le causa perjuicio la omisión y no decide impugnar la decisión, el tercero no está legitimado para interponer la revisión porque, al margen de que le cause o no perjuicio, es un recurso excepcional.

En cuanto a la sugerencia del señor Ministro Cossío Díaz de matizar la página treinta y tres del proyecto, estimó no ser necesaria porque, precisamente, tendría que analizarse si al tercero le agravia la decisión en cuestión para determinar si tiene o no legitimación, ya que, en el fondo, va a obtener un fallo que lo beneficie.

Por lo que ve a la página treinta y cinco de la propuesta, observó que el proyecto prevé que “el contenido de los agravios no puede conducir a declarar la procedencia o improcedencia del recurso de revisión”, a lo que puntualizó que la procedencia del amparo directo está en función de, primero, la omisión de un análisis de constitucionalidad de leyes, o de interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional y, segundo, cuando sea de importancia y trascendencia y que así lo determine esta Suprema Corte, con base en el Acuerdo General 9/2015 de este Tribunal Pleno, además de las diversas tesis de la Primera y la Segunda Salas, las que tratan de la improcedencia del amparo directo en revisión cuando se dé la inoperancia de los agravios.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Cossío Díaz distinguió que la página treinta y seis del proyecto indica que “está legitimado para recurrir la sentencia dictada en amparo directo cuando subsista un tema propiamente constitucional [...] Además, las cuestiones que el recurrente alegue como agravio le ocasiona la omisión en que incurrió el Tribunal Colegiado sólo podrá determinarse al analizar la procedencia del recurso o el fondo del asunto cuando se examine la eficacia o ineficacia de sus planteamientos” y que en la diversa página treinta y cinco se señala cuál es esa condición, por lo que la tesis que se propone no indica que necesariamente se tenga que determinar, de inicio, si es un problema de constitucionalidad o legalidad, sino que el tercero tiene legitimación por el hecho de tener reconocido ese carácter y, en el fondo, podrá determinarse si se trata de uno u otro problema.

Valoró el proyecto como correcto, en tanto se acota a la legitimación, sin entrar al tema de las constitucionalidades o legalidades, mayores beneficios o, en fin, los aspectos citados por la señora Ministra Piña Hernández.

Advirtió que, si se liga la condición del agravio con la de legitimación —por lo expuesto por los señores Ministros Pérez Dayán y Piña Hernández—, se le negaría al tercero una posibilidad que tenía con sólo ser parte en el juicio de amparo, en función de algo que todavía no se entra a estudiar, como es determinar si la materia es de constitucionalidad o legalidad.



Sesión Pública Núm. 48

Martes 30 de mayo de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las trece horas con cuatro minutos y reanudó la sesión a las trece horas con cuarenta minutos.

La señora Ministra Piña Hernández puntualizó que la tesis propuesta indica que el tercero está legitimado para interponer la revisión no sólo porque es parte en el juicio de amparo, sino en función de que se le cause un agravio por la omisión del tribunal colegiado de estudiar el tema de constitucionalidad, como se lee en su página treinta y cinco: “el tercero interesado se encuentra legitimado para recurrir la sentencia dictada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito que resuelva u omita un tema propiamente constitucional, en virtud de que es parte en el juicio constitucional y, con motivo de la sentencia de amparo ha sufrido directamente una afectación en su esfera jurídica ya que el análisis de la constitucionalidad del artículo en controversia podría ser medular para resolver el fondo del asunto”, y en la tesis expresa que “está legitimado para recurrir la sentencia dictada en amparo directo cuando subsista un tema propiamente constitucional, pues esa circunstancia implica el derecho subjetivo que lo faculta y legitima, en su calidad de parte en el juicio constitucional, para interponer el recurso de revisión; aunado a que, con motivo de la sentencia de amparo ha sufrido una afectación directa en su esfera jurídica, en la medida de que por cuestiones de legalidad se concedió el amparo a su contraparte”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recalcó que la sentencia del amparo directo es terminal, generalmente, y que la existencia del recurso de revisión está relacionada estrictamente con la materia precisada en la Constitución, por lo que es excepcional. Recordó que, cuanto este Tribunal Pleno se pronunció acerca del recurso de queja previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, se dijo que la legitimación de recurrente estaba en función de que se le produjera un agravio por la decisión del tribunal.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó a favor del proyecto, y secundó las sugerencias del señor Ministro Cossío Díaz.

Subrayó que el artículo 107, fracción IX, constitucional reza que “En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno”, por lo que, reunido cualquiera de los tres requisitos —resolver sobre la constitucionalidad o convencionalidad de normas generales, interpretar directamente un precepto de la Constitución, u omitir alguna de las dos condiciones anteriores habiendo sido



planteadas— se tiene legitimación para interponer la revisión.

Resaltó que la tesis que se propone indica que “Además, las cuestiones que el recurrente alegue como agravio le ocasiona la omisión en que incurrió el Tribunal Colegiado sólo podrá determinarse al analizar la procedencia del recurso o el fondo del asunto cuando se examine la eficacia o ineficacia de sus planteamientos”, por lo que distinguió entre los aspectos a valorar para superar la primera barrera, que es la procedencia, de los otros para superar la segunda barrera, en el fondo, como que los planteamientos sean infundados o inoperantes, por ejemplo.

El señor Ministro Medina Mora I. se expresó en contra del proyecto porque, aun cuando no integraba esta Suprema Corte al emitirse los criterios en contradicción, se inclinó en favor del de la Segunda Sala.

Apuntó que el proyecto no sólo se limita a sostener que no debe desecharse la revisión por el concepto de legitimación, sino que afirma que hay casos en los que existe interés del tercero para combatir la omisión, lo que no compartió porque la sentencia dictada en un amparo directo, si omite el estudio del concepto de violación en el que la quejosa oponga la inconstitucionalidad de una norma, pero concede el amparo en un tema de legalidad, el tercero no está en aptitud de dolerse de esta omisión, porque ningún interés puede aducir en que se realice el estudio de un tema que, o constituye una pretensión de su contraparte, o no es



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la base de la concesión del amparo que lo perjudica, incluso, por regla general, de resultar fundado, lo perjudicaría aún más, pues desaparecería la norma que sustenta el sentido del acto reclamado.

Específicamente no coincidió con la afirmación de la página treinta y tres del proyecto, en cuanto a que del “análisis de constitucionalidad, a su juicio, pudiera resultar medular a efecto de que al estudiar el fondo del asunto se realizara la interpretación definitiva del artículo tildado de inconstitucional” porque, cuando la interpretación de la norma se hace prescindiendo del tema de constitucionalidad, se traduce en un aspecto de estricta legalidad, cuya solución corresponde en definitiva al tribunal colegiado como órgano terminal, sin que el tercero interesado pueda valerse de la pretensión de inconstitucionalidad de su contraparte para lograr un reexamen al respecto.

El señor Ministro Pardo Rebolledo compartió la propuesta del proyecto, en lo general; sin embargo, consideró conveniente distinguir dos temas que se han tocado.

En primer lugar, precisó que el tema de la contradicción de tesis se centra en la legitimación del tercero para hacer valer el recurso de revisión en amparo directo, siendo que la argumentación del proyecto parte de que tiene legitimación porque es parte en el juicio de amparo, por lo que, de entrada, no podría negársele la posibilidad de interponer ese recurso, ya que así lo prevé la Ley de Amparo; no obstante,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

en su página treinta y tres refiere que “sino también porque con motivo de la sentencia de amparo puede sufrir una afectación directa en su esfera jurídica”, lo que conlleva a escenarios distintos, dependiendo de los casos y, por tanto, la legitimación ya no dependería sólo de que fuera parte en el juicio de amparo sino que, además, se deberá analizar, en el momento de admitir el recurso, si sufre o no una afectación directa en su esfera jurídica, lo cual no compartió de la propuesta.

Aclaró que lo anterior no significa que todos los recursos que haga valer un tercero tendrán que ser procedentes, sino que habrá que analizar los requisitos de procedencia de este recurso excepcional, contenidos tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo: que haya cuestión de constitucionalidad y que haya importancia y trascendencia.

El señor Ministro Franco González Salas recordó que participó en la formación del criterio de la Segunda Sala, y se fijó jurisprudencia a partir de repetición de casos durante aproximadamente diez meses. Anunció que reiterará lo manifestado de su parte durante las discusiones que formaron el criterio, por lo que votará en contra del proyecto. Adelantó que, en función de la decisión mayoritaria de este Tribunal Pleno, contemplará formular o no un voto particular para explicitar sus razones.

El señor Ministro Pérez Dayán apuntó que se argumentó que el tercero tiene legitimación porque es parte



del juicio de amparo, y que la procedencia dependerá de lo previsto en el artículo 107, fracción IX, constitucional: “En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno”; sin embargo, el artículo 87 de la Ley de Amparo cita que “Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional”, con lo cual concluyó que no se debería sostener que, con simplemente surtirse los supuestos del citado artículo 107, existe un planteamiento de constitucionalidad o de inconvencionalidad cuyo estudio se omitió, ni que ello es suficiente para estimar que todas las partes tienen legitimación, puesto que la Ley de Amparo expresamente niega la legitimación en la causa a muchas partes como, en este ejemplo, a dos sujetos,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

máxime que diversa jurisprudencia ha excluido de esa legitimación a otras partes tratándose de determinados recursos, por ejemplo, en la queja, la autoridad no tiene legitimación cuando se alega el cumplimiento de una ejecutoria o inexactitud sobre de ella.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció en contra del proyecto, ya que también formó parte de la Segunda Séala cuando se generó su criterio, por lo que, al igual que el señor Ministro Franco González Salas, ratificaría lo dicho de su parte durante las discusiones respectivas.

Abundó que su razonamiento parte de la base de que el agravio jurídico es un principio general del recurso, por lo que si, en el caso, la omisión de un argumento de inconstitucionalidad no sólo beneficia al tercero, sino que únicamente causa agravio al quejoso, no podría el tercero interponer la revisión en contra de la sentencia de mérito, máxime que en la Ley de Amparo se prevé que en todos sus recursos se expresen los agravios correspondientes.

Explicó que, viéndolo desde otra perspectiva, si se analizara la inconstitucionalidad de la ley en la revisión a petición de tercero, parecería que está jugando en su contra pues, de resultar fundada, se concedería el amparo al quejoso y, entonces, equivaldría a una suplencia oficiosa por su contraparte, por lo que no encontraría una razón de ser a un agravio del tercero que sólo tenga por objeto favorecer al quejoso.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En cuanto a que se requiere la existencia de un agravio para la procedencia, ejemplificó que en el artículo 82 de la Ley de Amparo, para la revisión adhesiva, se parte del supuesto de que se pretende impugnar una ley que, en realidad, sólo afecta al quejoso.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció de acuerdo con el proyecto, pues es consistente con sus votos en la Primera Sala, además de que es un criterio que ha sostenido dicha Sala reiteradamente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales advirtió que cinco señores Ministros se han pronunciado a favor del proyecto y cinco en contra, por lo que resultaría conveniente aguardar la presencia de la señora Ministra Luna Ramos para desempatar las posiciones.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión de este asunto para una siguiente sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas con siete minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves primero de junio del año en curso, a la hora de costumbre.



Sesión Pública Núm. 48

Martes 30 de mayo de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN